

## LA ECONOMIA IBEROAMERICANA, ENTRE EL TEMOR Y LA ESPERANZA. TRES CASOS EJEMPLARES

---

*Juan Velarde Fuertes*

### La Tribuna Iberoamericana.

**P**or muchos motivos interesa a los españoles la suerte económica de Iberoamérica. En primer término, por pura fraternidad. El viejo tronco común se incidió definitivamente a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, entre sus diversos nuevos retoños existe tal afinidad, que les apetece tener las ramas entrelazadas, sabiendo muy a fondo los unos de los otros. En segundo lugar, porque el mundo de los negocios de España tiene un campo importante de expansión en toda la región iberoamericana. Son tan patentes ciertas economías externas que van incluso más allá del idioma en relación con estos países, que sería estúpido no aprovecharlas a fondo. Claro es que el beneficio puede ser alto si las cosas van bien en lo económico en el mundo hispano, y reducirse muchísimo, o incluso anularse, si la crisis galopa en estos países. Finalmente, el tercer motivo es pedagógico. Más de una vez, a lo largo de la Edad Contemporánea, España se ha encontrado en situaciones parecidas a las de los pueblos iberoamericanos. Hemos recibido los mismos cantos de sirena, capaces de hacer estrellarse a cualquier economía y, cuando hemos reaccionado con sagacidad, el haberlos desoído ha rendido buenos y muy parecidos frutos. Es éste un momento muy delicado para nuestra economía. A partir de finales de 1991 parece haber perdido todo norte. Da la impresión de que al percibir, en torno a los Acuerdos de Maastricht, que habíamos despilfarrado en exceso el tiempo concedido para estar preparados para la unión económica y monetaria en Europa, que se convirtió en una letra a fecha cortísima, y al comprender que precisábamos ir en vanguardia en este proceso unificador, so pena de pagarlo con dureza en términos de desarrollo, hemos quedado desconcertados. Son estos momentos muy peligrosos. El primer demagogo que toque el caramillo puede arrastrar, como si España fuese Hamelin, a nuestra población hacia un fracaso histórico. El observar lo que ha sucedido en otros países, bastante semejantes en muchas cosas, cuando cedieron a las tentaciones y, también, cuando pusieron en orden sus casas, es adecuadísimo.

Por este triple motivo éste pasa a ser el momento de la observación de la economía iberoamericana. Afortunadamente acabamos de poderla contemplar desde un palco proscenio extraordinario. Dentro de las espléndidas novedades que ofrece la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, es evidente que destaca la creación, financiada gracias a la colaboración de tres importantes Fundaciones culturales, la Fundación Areces, la Fundación BBV y la Fundación Caja Madrid, de la llamada Tribuna Iberoamericana. Para inaugurarla se ha convocado en Madrid a tres dirigentes fundamentales de la política económica de la región: al ministro de Hacienda de Chile, Alejandro Foxley; al también ministro de Economía de la República Argentina, Domingo Cavallo; y, como cierre, al Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Pedro Aspe.

Como contrapartida a ingresar como Académicos correspondientes de la mencionada Corporación, los tres desarrollaron sendos discursos de un interés excepcional sobre la situación de sus países.

### Tres vidas paralelas.

Impresiona observar el paralelismo de las vidas de Foxley, Cavallo y Aspe. Los tres inician sus estudios en centros importantes de sus países. Cavallo se doctora en Ciencias Económicas en 1970, en la Universidad Nacional de Córdoba; Foxley es ingeniero por la Universidad Católica de Valparaíso; Aspe, es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. A continuación pasan a completar sus estudios en centros famosos de los Estados Unidos. Cavallo se doctorará en Economía por la Universidad de Harvard; Foxley también se doctorará en Economía por la Universidad de Wisconsin; Aspe recibirá este doctorado en Economía por el MIT.

Con estas ramas se convierten en profesores e investigadores notables. Cavallo pasará a ser profesor titular de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba y director fundador de la Fundación Mediterránea; Foxley explicará en la Universidad norteamericana de Notre Dame y, como visitante, en las de California-Berkeley, MIT, Oxford y el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex, y se convierte en presidente de la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN). Aspe enseñará en el MIT, con Modigliani y Dornbusch, participará en las Lionel Robbins Lectures de la London School of Economics, será profesor largo tiempo en el ITAM, e investigará en el Banco de México.

Como fruto de esa labor son autores los tres de artículos y libros importantes, algunos de los cuales se han convertido en clásicos al someter a crítica agudísima la situación económica de sus patrias respectivas: los *Volver a crecer* (Sudamericana-Planeta, 1984) y *La Argentina que pudo ser* (Manantial, 1989) de Cavallo; el *Chile y su futuro. Un país posible* (Cieplan, 1987) de Foxley, y el *Debt crisis and adjustment in Mexico* (MIT, 1987) de Aspe, son objeto de continuas referencias por estudiosos y políticos.

Los tres comprendieron que era necesario acudir a la prensa para que sus conciudadanos tuviesen cabal noticia de los problemas económicos. Vemos a Cavallo publicar con abundancia en *La Nación*, en *Clarín*, en *Ambito Financiero*, en *El Cronista Comercial*; a Foxley en *Análisis*, en *Hoy*; a Aspe en *Excelsior*, en *The Wall Street Journal*.

Finalmente comprendieron los tres que tenían que asumir el reto político, precisamente en el momento en que toda Iberoamérica acepta, de nuevo, que la democracia debía ser el fundamento de la convivencia política. Cavallo se convertirá, en calidad de independiente, en 1989, al ser elegido Menem como presidente de la República Argentina, en ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y en 1991, en ministro de Economía. Alejandro Foxley será, primero, coordinador del Área Económico Social de la Concertación por la Democracia para la campaña presidencial de Patricio Aylwin y, como miembro de la Democracia Cristiana chilena, ministro de Hacienda desde 1990. Pedro Aspe en 1986 se convierte en asesor para Asuntos Económicos del Director General del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, el órgano doctrinal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y llega a ser Secretario de Programación y Presupuesto en 1987 y Secretario de Hacienda y Crédito Público, desde diciembre de 1988, con el presidente Salinas de Gortari.

Menem, Aylwin y Salinas de Gortari, -o si se prefiere, Cavallo, Foxley y Aspe- decidieron poner coto a la crisis de la deuda externa que zarandeaba a los tres países, con caídas en el PIB, agobios de las balanzas externas, inflaciones fortísimas y paros acusados. Los tres ministros buscarán en la ciencia económica más rigurosamente académica, la inspiración para su actuación política. Los tres economistas contemplan, ahora mismo, con gozo evidente, que al seguir sus consejos, sus países renacen a la esperanza.

Tan importante es esto que bien merece la pena observarlo más de cerca.

### La solución chilena. La propuesta de Foxley.

Desde la *Tribuna Iberoamericana* de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Alejandro Foxley, ministro de Economía de Chile, pronunció una conferencia titulada *Transición democrática con crecimiento económico y equidad social*. Tras los triunfos electorales de octubre de 1988 y de diciembre de 1989, al triunfar en las elecciones presidenciales el candidato democristiano Patricio Aylwin, el nuevo régimen tenía que exponer con claridad cuál iba a ser su modelo de política económica.

La Administración Pinochet había defendido como modelo económico la concesión de un énfasis esencial al sector privado, el liberar el mercado, el liberalizar asimismo al sector externo y el desregular, en todos los sentidos, la economía. Añadamos la Reforma Provisional, realizada en Chile en 1980, que creó para los regímenes de pensiones por vejez, invalidez, viudedad y orfandad, un sistema de capitalización individual de administración privada, a través de las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que sustituyó a grandísima parte del sistema de reparto que imperaba en la Seguridad Social chilena. Como señala Luis Larraín A. en su trabajo *Sector previsión* incluido en el libro dirigido por Cristián Larroulet V., *soluciones privadas a problemas públicos* (Instituto Libertad y Desarrollo, 1991), a causa de la necesidad de invertir que experimentan estos fondos de pensiones, las AFP "se convirtieron en las mayores inversionistas institucionales del mercado". Por supuesto que ahí se encuentra, también, uno de los puntos más delicados del nuevo sistema. Aun con el pesado choque que el modelo experimentó como consecuencia de la *crisis de la deuda externa* -el PIB cayó un 16% durante el período 1982-1983, el paro creció hasta situarse por encima del 30% en 1983 y por encima del 20% hasta 1986; los salarios reales se redujeron casi un 20% y, durante cinco años subieron muy poco-, el modelo se mantuvo y cuando Aylwin recibe los poderes en 1990, como señala Patricio Meller, respecto al resto del área iberoamericana "Chile tiene una situación macroeconómicamente relativamente mucho mejor y ha alcanzado una base estructural más sólida para las perspectivas de crecimiento y desarrollo en la década de 1990".

La Administración Aylwin había considerado que la *economía social de mercado* era la "opción que garantizaba mejores oportunidades para un desarrollo sostenido". Pero éste debía concretarse, tras la positiva experiencia económica anterior y el caos al que había conducido a Chile el Gobierno de Unidad Popular, en "un crecimiento estable, basado en la inversión y en las exportaciones, en lugar de bonanzas artificiales de corto plazo". Para eso fue preciso, primero, combatir el excesivo crecimiento -casi un 10%- de 1989, que da la impresión que pudo deberse a exigencias electoralistas de Büchi-Pinochet. En segundo lugar, en 1990, obligó a transferir al mercado las alzas en el precio del petróleo y no acudir a subsidios del sector público para evitar momentáneos impactos inflacionistas.

Se unió todo esto, que en el fondo podía estar en el programa opositor de la derecha (UDI-RN), con un planteamiento social original que constituyó el que se podría denominar *sello de Foxley*: una reforma tributaria que, por supuesto, no alteró en lo esencial la línea fiscal aprobada en 1984, heredera, a su vez, de la de 1974, capaz de financiar un mayor gasto social en áreas tales como la salud, la educación y la vivienda y, al mismo tiempo, para que este programa reformista no originase ninguna perturbación, suficiente para provocar un superávit fiscal. Durante los tres años de mandato de Foxley efectivamente se generó "un superávit fiscal equivalente a un 2% del PIB en promedio, llegando a un 3% del PIB en 1992".

Se concede también mucha importancia al crecimiento de la formación bruta de capital fijo, que en 1992 se aproximó "a un 23% del PIB, la tasa más alta registrada en el país". Para no tener que financiar tal esfuerzo inversor, de modo masivo, con ahorro externo, con las consecuencias habituales derivadas de estos endeudamientos -pensemos que en los años setenta y ochenta el ahorro nacional chileno alcanzó, como promedio, al 10,7% del PIB-, se procuró que éste se incrementase; en 1992 llegó al 19,6% del PIB.

El impulso a la economía procede, sobre todo, del sector exterior. A pesar de la coyuntura depresiva, las ventas al exterior se incrementaron, en 1992, en una tasa real del 12%. Con legítimo orgullo pudo señalar Foxley "que la economía chilena compite hoy fuertemente con los más eficientes productores mundiales en una amplia variedad de rubros. Chile exporta hoy más de un tercio de su producción y un 70% de ella está constituida por bienes transables internacionalmente". Japón es su primer socio comercial. Aproximadamente, dijo Foxley, "Chile distribuye sus exportaciones en proporción de aproximadamente un tercio para cada uno, en los mercados de Asia, la CE y América".

Finalmente, el modelo supone la existencia de un alto grado de concierto -"una especie de obsesión nacional", subrayó Foxley- entre empresarios y sindicatos, -lo que origina que "el número de días de huelga por trabajador por año ha sido de los más bajos del mundo"-, entre el sector público y el privado; entre Gobierno y oposición; entre Ejecutivo y Congreso.

### Las preguntas de Foxley.

Pero Foxley no es un iluso. Cuatro grandes retos abren sus interrogaciones ante el futuro de Chile. El primero lo formula con precisión así, y sospecho que mirando bastante lo sucedido en España: "¿Cuánto tiempo es posible contar con este ánimo de cooperación para seguir adelante con una política económica rigurosa, caracterizada por el equilibrio fiscal y el fuerte énfasis anti-inflacionario?".

La segunda es doble y se refiere a las consecuencias de esa decidida apertura al exterior de la economía chilena. En primer término, "¿es posible contar con [los]... *pactos de solidaridad* para la segunda y más difícil fase de la reconversión productiva que haga posible un sector manufacturero de alta productividad que se desarrolla hacia los mercados externos, mano a mano con las actividades que constituyen hoy la base del éxito exportador de Chile, los recursos naturales?" Léase, en ese sentido el largo artículo de Eduardo Sepúlveda M., *Crisis del carbón: ¿Muerte natural o eutanasia?*, aparecido en *El Mercurio* el 21 de marzo de 1993. Jorge Garrido, dirigente sindical de la empresa hullera estatal Carville asegura: "Es una utopía aferrarse al carbón, dada la política energética del Gobierno, pero abandonarle ciento por ciento, tampoco queremos. En Chile todavía no ha sido aprobada la ley de eutanasia, y ningún partido, gobierno o candidato está facultado para matar al carbón".

La otra pregunta relacionada con esta necesaria apuesta al exterior se debe al auge del proteccionismo que se palpa en la actitud de las grandes potencias económicas mundiales, y la formula así: "¿Cómo podrá Chile -en ese escenario internacional- contrarrestar las crecientes presiones internas para cerrar y proteger su economía?".

Un documento que circulaba en marzo de 1993 por Chile, titulado *¿El fin del sector exportador?* señala que el que continúen creciendo las exportaciones no es señal de bienestar del sector: "Este aumento de las exportaciones totales se explica en gran parte por el efecto de

inercia que tiene la maduración de las grandes inversiones y, por otra, debido al gran esfuerzo de inversión en productividad de las empresas que compiten en el mercado mundial, aumentando sus producciones y mejorando sus costos para compensar márgenes cada vez más estrechos. Así, mientras el aumento bruto de las exportaciones aparece como un éxito, al interior de las empresas la realidad es muy diferente".

El siguiente cuadro, que muestra la marcha de los resultados contabilizados en pesos constantes de seis empresas, tres -COPEC, CMPC y Celulosa Arauco, que dependen del mercado exterior- y tres -Endesa, Teléfonos y Entel- que lo basan en el interior, prueba con claridad que Chile tiene ahí un serio problema:

Empresas	RESULTADOS EN MILES DE MILLONES DE PESOS 1992				
	1988	1989	1990	1991	1992
COPEC .....	107,8	128,2	70,0	60,1	60,1
Endesa .....	91,2	69,4	46,9	76,5	99,5
CMPC .....	75,9	113,0	74,7	59,1	64,1
Celulosa Arauco .....	70,1	57,3	41,2	24,6	24,4
Teléfonos .....	32,5	66,7	42,4	56,2	70,5
Entel .....	27,5	39,4	27,6	30,8	35,0

Finalmente, todo el modelo económico chileno descansa en un complicado entramado que requiere una democracia ejemplar. Como señala Foxley, al no haber resuelto adecuadamente la democracia chilena el problema de la financiación de los partidos políticos y de las elecciones, ¿cómo hacer que el sistema -y es evidente que cuando hablaba de esto tenía que pensar, a la fuerza, en Italia y España- se convierta en invulnerable "a las irregularidades financieras y la corrupción que ha irrumpido como una epidemia en las democracias más avanzadas"?

Yo me atrevo a agregar otra pregunta adicional que, desde que me trasladé a Santiago de Chile a estudiar las AFP, recién creadas, y que, tras recordar lo que ocurrió con el sistema bancario chileno en 1982, aun se acentuó más. Las inversiones que fundamentan su rentabilidad son valores con respaldo del Estado y acciones de sociedades anónimas. Esto último puede complicar las cosas. Basta un ejemplo. Las recientes noticias de las pugnas de los accionistas de la *Endesa* chilena se fundamentan, en gran parte en las dispares tomas de posición de AFP Provida Fondo de Pensiones -con el 6,75% del capital-; AFP Santa María Fondo de Pensiones -con el 5,69%-; AFP Habitar S.A. -con el 4,99%-; AFP Summa Fondo de Pensiones -con el 3,01%-; AFP Unión S.A. Fondo de Pensiones -con el 2,33%- y, finalmente, AFP Cuprum S.A. Fondo de Pensiones -con el 2,23%-, que, como señalan Bernardita del Solar y Claudio Gaete en *Qué pasa* del 6 de febrero de 1993, pueden afectar a la buena marcha de la que es, hoy en día, la mayor empresa chilena y, con ello, a la de las propias AFP. Con una inflación baja, un sistema fiscal adecuado y una economía en auge, como sucede con la chilena hasta ahora, no existe problema. Pero ¿qué ocurrirá con las AFP en caso de que se instale en Chile una crisis grave y, sobre todo, si se desarrolla con un fuerte acompañamiento inflacionista?

### La necesidad de mirar atrás.

A partir de un famoso estudio de Días Alejandro quedó muy claro que la economía argentina había atinado a insertarse del modo más adecuado en la economía mundial en el siglo XIX. A su compás tuvo altísimas tasas de desarrollo y comenzó a comportarse como la de otros cuatro países que se han convertido en opulentos miembros de la OCDE: Estados Unidos y Canadá en América, y Australia y Nueva Zelanda en el Pacífico. Para siempre quedará en los argentinos el agradecimiento hacia Colin Clark porque en 1942, cuando redacta el librito *La economía de 1960*, aun apuesta a fondo por el futuro de su economía. Hoy, con unos 3.000 dólares de renta, si se apresta a participar en la dura carrera del desarrollo, debe volver la vista atrás para analizar por qué corrió desembarazadamente en ella de 1880 a 1930 y por qué, a partir de esta fecha y hasta ahora mismo, más que carrera, lo que se observa en el caso de Argentina es un conjunto de caídas espectaculares y de cansinos progresos.

Precisamente eso explica la estructura de la intervención de Domingo Cavallo, el actual Ministro de Economía de la República Argentina, en la Tribuna Iberoamericana de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Para explicar el proceso presente de cambio político, económico y social, comenzó por echar una mirada atrás.

A efectos actuales, la historia de este país del Plata, da comienzo en 1860 cuando, dotado de la Constitución de 1853 y de una estructura política federal y republicana, la nación se unifica definitivamente convirtiéndose Buenos Aires en su capital. A partir de ese momento, en Argentina se ofrece un panorama muy estable políticamente, con un Estado que amplía el espacio económico puesto a disposición de los argentinos -es el momento en que el Ejército dispersa, elimina o reduce a la obediencia a los indios, en un proceso muy parecido al norteamericano, y del que quedan rastros evidentes en el inmortal *Martín Fierro* de Hernández-, y que crea infraestructuras adecuadas para los servicios; con las puertas abiertas para recibir inmigrantes europeos a los que ofrece una más que aceptable estabilidad económica, y con una excelente inserción en el sistema económico mundial, pues Argentina comienza a ofrecer granos, carne, lana, que el mundo europeo demanda con avidez.

El resultado es el lógico. La tasa media anual de crecimiento real del PIB argentino a lo largo de los setenta años que van de 1860 a 1930, es la colosal del 5%. Cifra tan alta no alcanza en ese período ninguna otra nación.

Todo se altera precisamente a partir de 1930. El golpe del general Uriburu en septiembre de 1930 tuvo mucha importancia. Interrumpió una situación democrática que era bastante normal desde que en 1880 los 40.000 hombres que manda Roca consiguen la federalización de Buenos Aires, a pesar de los esfuerzos de la Guardia Nacional y de las milicias de Tejedor. Por supuesto que existió el sobresalto de 1905, pero nada de esto pasaba de ser un conflicto bastante superficial. Pero en 1930, el Ejército, que había sostenido, parecía que sin fisuras, al presidente Hipólito Yrigoyen, contempla en silencio cómo es depuesto por una oficialidad joven que intenta emular otros modelos extranjeros: los jóvenes turcos; la Dictadura de Primo de Rivera; el nacionalismo francés; el fascismo italiano; los complicadísimos nacionalismos germanos con sus organizaciones paramilitares, como los Cascos de Acero y las SA. Todo esto deja una huella muy honda en la oficialidad joven que sigue a Uriburi. Mientras el Ejército se depura de los militares yrigoyenistas, se nutre ideológicamente de literatura nacionalista, entre la que destacan las publicaciones del grupo FORJA. La oficialidad joven que participó en 1930 -Jorge Abelardo Ramos en *La era del peronismo. 1943-1976* (Ediciones del Mar Dulce, 1981) menciona entre ellos a Perón, Silva, Lucero, Sosa Molina, Ramírez, Descalzo-, crea el núcleo de un auténtico tercer

partido, al que debería llamarse *partido militar*, que, desde entonces, entra en la alternativa del poder; primero, con conservadores y radicales; después con radicales y peronistas. Desde la constitución del GOU -o Grupo de Oficiales Unidos-, en el que es evidente la influencia del coronel Perón como destaca R. A. Potash en *El ejército y la política en la Argentina*, es evidente que este partido existe. Cuando Perón entra en el juego bipartidista, el partido militar lo rompe, al pasar a actuar contra Perón, como sucede con el levantamiento del Lonardi que derriba al justicialismo en 1955.

### Una nueva situación.

Estos acontecimientos iniciados en 1930, causaron en relación con la situación económica, una serie de consecuencias perturbadoras. Cavallo mencionó, como más importantes, la pérdida de la estabilidad política; la separación del sistema económico mundial, facilitado porque la Gran Depresión acentúa la ruptura del comercio internacional; el que se azuza en todas partes, incluida la Argentina, hacia el triunfo a las posturas autarquizantes, del crecimiento a partir del mercado interior, que llevarán a un creciente aislamiento político, incluso exhibido como una bandera, como sucedió con la famosa Tercera Posición peronista, que facilita, a su vez el encapsulamiento económico; finalmente, la ampliación del tamaño del Estado, que incluso le va a conducir a adueñarse de empresas hasta los límites pintorescos de la relación que Sarraouille publicó en la revista *Desarrollo Económico*, lo que a su vez explica que el Estado comience a tener crecientes déficit fiscales. La consecuencia de esto es grave. Al perder el crédito el sector público ha de recurrir una y otra vez, a la inflación, hasta llegar al paroxismo ya reseñado de 1989.

### El cambio.

Para Cavallo el cambio se inició en 1983, al reinstaurarse la democracia, tras el descalabro experimentado por el Proceso, o partido militar, en el conflicto de Malvinas. Este es el papel histórico del presidente Alfonsín. El país comienza a normalizarse en lo político, gracias a la puesta en marcha, de nuevo, de la Constitución de 1853. El cambio político no afecta sólo al interior, sino al exterior. En 1984 se acepta, en virtud del *Laudo papal*, la paz con Chile; en 1985 se inician buenas relaciones con Brasil, eliminando la costosa carrera nuclear entre las dos potencias, mientras comienza Mercosur a dar los primeros pasos. Menem acentuará la apertura; restablece las relaciones con el Reino Unido; firma el Tratado de Asunción, por el que Mercosur abarcará Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; ratifica el Tratado de Tlatelolco, de no proliferación de armas nucleares; participa en el conflicto de Irak, como un aliado más de Norteamérica.

Con el flaqueo que de esta apertura al exterior se inicia el segundo cambio, el de la reorganización del Estado, para achicar sus competencias. La privatización de las empresas públicas tiene una doble consecuencia: alivios presupuestarios por una parte y, en tanto en cuanto parte de estos activos pasan al extranjero, robustecimiento de la balanza de pagos y sostenimiento de la cotización de la moneda nacional.

Este achicamiento del Estado, que permitió reducir el gasto público en un 10%, permitió atender mejor el flanco social, allegando más recursos a la seguridad social. Por otro lado procuran fomentarse las transferencias de gastos a las provincias y a los municipios, por creer que así se racionalizan los desembolsos del sector público. Al mismo tiempo se mejora la administración tributaria y pueden eliminarse tributos dañinos por sí mismos, como los impuestos

a la exportación, creándose una estructura tributaria muy simplificada, basada en el IVA; en un impuesto sobre los beneficios de las empresas; en otro sobre la renta de las personas físicas; en las contribuciones para la seguridad social y, finalmente, en los impuestos especiales sobre naftas, alcoholes y tabaco. Con la simplificación aumentó la recaudación. Cavallo señaló en su intervención que, a partir de 1991, se había eliminado el déficit. Sin embargo, según CEPAL el Sector Público no financiero nacional, o sea, excluidas provincias y municipios, tuvo en Argentina, en 1991 un déficit del 2,2% del PIB, magnitud que, de todos modos es un porcentaje tolerable.

La tercera pieza del cambio fue la liberación del mercado, tanto respecto al exterior -disminuyen los aranceles y se eliminan controles de precios y de cambios, al aceptarse para el peso un patrón dólar, con convertibilidad plena-, como en el interior. Facilitan esta situación las privatizaciones de las empresas estatales de todo tipo, incluidas las de electricidad, puertos, gas y su distribución y transportes ferroviarios. Estos tendrán que competir, en régimen de libertad de tarifas con la carretera. Se piensa privatizar las centrales nucleares y los aeropuertos. Al final quedarán en manos del Estado, del sector empresarial público, únicamente el Banco de la Nación Argentina y el Banco Hipotecario.

Todo se vendría abajo si el peso no fuese una moneda estable. Pasa a ser clave, por eso, el funcionamiento de una caja de Conversión en el Banco Central para mantener perfectamente convertibles en dólares los pesos, que de esta manera pueden transformarse en una moneda aceptada con normalidad. Como dijo gráficamente Cavallo, "se comienza a pedir el vuelto" en las transacciones comerciales. Con un 12% de aumento anual del IPC y un 3% de los precios al por mayor -la diferencia viene determinada por las rigideces de los servicios-, se piensa que es posible que se reduzca en el inmediato futuro este IPC al aumento, en 1993, de alrededor del 3%, porque se va a actuar con fuerza sobre los servicios.

También se ha decidido alterar la estructura de la Seguridad Social con la nueva ley de subsidios y pensiones, que va a conducir a un sistema de capitalización que, de algún modo, se va a parecer al modelo chileno. Finalmente, Menem, gracias al conocimiento de las estructuras sindicales y al apoyo del aparato peronista -o, por mejor decir, neoperonista-, se atreve a plantear la necesidad de flexibilizar el mercado del trabajo.

No habló Cavallo de la corrupción. Sin embargo en *Somos* del 18 de enero de 1993 le atribuían un papel esencial en la liquidación del ministro Manzano que, decía la revista, era "el nombre sospechado de corrupción para la opinión pública". "El Mingo", como lo llama Menem, también procura que se esfume este elemento de perturbación infiltrado en la economía argentina. Tampoco mencionó su papel en la desregulación de las obras sociales sindicales. No se ha logrado todo lo que pretendía, pero tras sus conversaciones con el ministro de Trabajo, Enrique Rodríguez, el panorama ya ha cambiado.

Las consecuencias no pueden ser mejores. Se recupera la inversión, que se incrementa en un 30% anual, aunque hay que admitir que se partía de niveles muy bajos. Mejora la productividad en el seno de las empresas. Vuelven los capitales argentinos. El aumento del ahorro interno permite prescindir del externo, con alivio para la situación de la deuda externa. Caen los índices de pobreza, y si crece el paro, al mismo tiempo que lo hace el empleo, al incremento del índice de actividad se debe. Como colofón, Argentina, que tuvo un muy buen sistema educativo en el pasado, se dispone a recuperarlo, con crecientes niveles de exigencia y de calidad. Sencillamente, para que toda esta honda transformación no sea flor de un día.

¿Durará esta situación? Todo depende de dos cosas: de la llegada de fondos del exterior y del mantenimiento de la recaudación impositiva. Ahí se va a jugar el futuro, no ya de Cavallo, que ha atinado en el modelo, pero que puede ser trastornado por la coyuntura internacional, sino el de la Argentina. Alguna nubecilla minúscula, como las declaraciones efectuadas a *Clarín* sobre la situación social de las fincas de Jujuy, muy en el estilo del viejo peronismo, efectuadas por el ministro de Salud y Acción Social, Julio César Araoz, quizá pueda convertirse en tormenta y desbaratarlo todo.

Cuando se puso en marcha una vasta protesta que hundió los razonables proyectos de Krieger Vasena y sus sucesores, hasta precipitar en 1969 hacia una serie crisis, se recordó lo que César Fernández Moreno había escrito en 1954, en *Argentino hasta la muerte*, como muestra de que los argentinos del interior "habían resuelto poner término al reino de la eficacia":

Y bueno soy argentino  
este es el revirado *canto natal* que yo traigo aquí  
l'm sorry a usted le molestará sepa que a mí también  
pero alguna vez tenemos que acercar la realidad a los papeles  
esta broca me sale de ser argentino  
*soy gaucho y entiendanló*  
soy de los de acá de este lugar y no de otro...

¿Julio César Araoz va a intentar provocar ese motín? ¿Menem podría tolerarlo? ¿La Argentina se ha cansado y está dispuesta a volver al sendero iniciado en 1930? Todos los que escucharon a Cavallo en la Tribuna Iberoamericana formularon votos porque estas posibilidades fuesen sólo un mal sueño.

### El nuevo México.

Jesús Silva-Herzog, un notable economista mexicano que es actualmente embajador de México en España, prácticamente casi iniciaba su conferencia *México hoy, en el nuevo entorno internacional*, de clausura del programa *México hoy*, de la Tribuna Americana en la Casa de América, el 23 de octubre de 1992, con estas palabras: "Hace diez años éramos un país en crisis. Nos tocó el difícil papel de hacer estallar la crisis de la deuda externa. La inflación amenazaba con caer en cauces hiperinflacionarios, el desequilibrio fiscal era mayúsculo, las reservas internacionales se había agotado y, lo más importante, la sociedad había perdido la confianza no sólo en la moneda, sino en las instituciones y en el futuro".

Hoy todo eso parece una pesadilla que se desea olvidar. La realidad se aleja de ella velozmente. Efectivamente lo sucedido es tan revolucionario que es preciso preguntarse si responde a algún planteamiento casual aprovechando alguna situación coyuntural, o si pretende alcanzar resultados muy permanentes y, en el fondo, llegar a un nuevo México. La aclaración de esto constituyó el meollo de la intervención de Pedro Aspe en la Tribuna Iberoamericana, titulada *Reflexiones sobre la modernización de la economía mexicana*.

Tres grandes transformaciones se han procurado para orientar del modo más adecuado posible el "profundo proceso de cambio estructural" emprendido en México. La primera ha sido la reforma macroeconómica que pretendía "abatir la inflación y el sobreendeudamiento, así como... eliminar las distorsiones que inhiben el crecimiento y, a partir de un nuevo piso

económico y de concertación social, estar en condiciones de crear un mejor nivel de vida y mayores oportunidades para los mexicanos".

La inició Miguel de la Madrid y se aceleró con Salinas de Gortari. Como dato espectacular de la misma se indica que la inflación en 1993 será cercana al 7%, la más baja de las últimas dos décadas, o lo que es igual, la más reducida que ha conocido "la mitad de los mexicanos, que nacieron precisamente durante esos años". Para lograrla, se pasó de un déficit de alrededor del 17% del PIB en 1982 "a un superávit, por primera vez en cincuenta años, de 0,5% del PIB en 1992", excluyendo para su cálculo los ingresos originados por la privatización de las empresas públicas que, en cambio han permitido "reducir la deuda pública consolidada total del 62,4% del PIB en 1988 hasta el 24,9% del PIB en 1992".

La liberalización del sistema financiero permitió que las tasas de interés respondiesen "con mayor flexibilidad a los cambios en las condiciones del mercado", al regularse el sistema financiero "con base en criterios de capitalización comparables con los estándares internacionalmente aceptados". Esto, que lisa y llanamente supuso el abandono "de un marco institucional de tasas de interés deprimidas y niveles elevados de encaje legal", significó un apoyo evidente al proceso de desaceleración de la inflación.

A estas políticas restrictivas fiscal y monetaria se unió la liquidación de "un contexto de fuerte indización salarial". Apoyándose, como señaló explícitamente, en la experiencia del Pacto de La Moncloa, surgió en 1987 el Pacto de Solidaridad Económica, que se transformó por la Administración Salinas de Gortari en Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, con el que se atajó esta peligrosa situación.

Si es importante esta gran transformación macroeconómica, no lo es menos la transformación microeconómica. Confluye con la macroeconómica en primer lugar en la reforma del Estado. Esta, a su vez exigía, para empezar, una modernización del sistema fiscal que "consistió en la drástica reducción de las tasas máximas del impuesto sobre la renta a las personas físicas -del 50% al 35%- y a las empresas -del 42 al 35%-"; en "la ampliación de la base gravable, eliminando privilegios que recibían ciertos sectores en detrimento del resto de la sociedad"; en fin, "en vigilar el estricto cumplimiento de las obligaciones fiscales". Con esto, en el período 1989-1992 se aceleró la flexibilidad tributaria: el PIB creció un 14,6% en términos reales y los ingresos tributarios no petroleros lo hicieron en un 31,3%, también en términos reales.

También el proceso de privatización, ampliado con "la participación de la inversión privada en la construcción y operación de obras de infraestructura, a través de diversas modalidades de concesión o arrendamiento", al crear "un Gobierno más sólido y compacto", al mismo tiempo que una economía más competitiva, acelera la modernización del conjunto del sistema económico mexicano.

Con todo ello, la política industrial, que en el pasado "descansaba en subsidios y protección", ahora se apoya en un sector privado cada vez más competitivo y en una reducción del papel de las instituciones del sector público a "aquellas áreas en las que el mercado no funciona adecuadamente o donde se requiere una mejor distribución de oportunidades". Lo impulsó el auxilio de la Banca de desarrollo, al sacarla de la ayuda "a grandes empresas ineficientes que en muchos casos eran propiedad del Gobierno", para llevarla a la financiación de "pequeñas empresas privadas, eficientes y flexibles".

Lo completa la creación en 1992, como alternativa al viejo sistema de jubilaciones de la Seguridad Social, del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), "mediante el cual los patronos depositan en las cuentas bancarias individualizadas de más de 10 millones de trabajadores, el 2% de la nómina, a fin de que el ahorro que se acumula en dichas cuentas les permita complementar sus pensión".

La liberalización del comercio exterior, en fin, procura ampliarse con la firma de Tratados de Libre comercio, no sólo el NAFTA, sino también con Chile y, en el futuro, con nuevas áreas.

Todo acaba teniéndose que completar con la reforma puramente microeconómica, esto es, con ese "lado difuso del desarrollo" que se puede vislumbrar a través del aumento de la formación bruta de capital fijo en las empresas privadas y en la productividad del trabajo, que permite diferenciar tres tipos de empresas en México: las que pertenecen al sector pujante y competitivo, "que representan aproximadamente una quinta parte del total del sector manufacturero"; las empresas condenadas, porque "para ellas los efectos de la desregulación y la corrección macroeconómica representan un reto difícil de superar", que son otra quinta parte; finalmente, los tres quintos restantes pertenecen a las que inician ahora su reconversión y modernización.

La tercera reforma es la puesta en marcha del llamado *liberalismo social* enfrentado tanto con el paternalismo como con el populismo, "que cobra sus intervenciones con deuda, inflación, y mayor miseria". Pretende esta filosofía que, a través del gasto social y del Programa Nacional de Solidaridad, se procuren mejorar, prioritariamente, las condiciones sociales de los mexicanos.

Por la confluencia de estos cambios, ha surgido un nuevo espíritu en México. Como señaló bellamente Silva-Herzog, "existe una actitud nueva, diferente. No es necesariamente mejor, sino sólo distinta. Hace unas semanas recibí en mi oficina de Madrid a un artesano-zapatero de un pequeño pueblo del Estado de México. Venía a ver las instalaciones y los medios de producción de Valencia y Alicante y a platicar con posibles socios. A pesar de sus años, nunca había salido del país. Me reiteró su convicción de que era necesario salir, ver otras cosas, aprender. Sólo así podría competir y sobrevivir".

## CONCLUSION.

Estos tres casos ejemplares -y podríamos ampliarlos a los de Bolivia, al esfuerzo de reforma de Nicaragua, al reto colombiano o al cambio de dirección de Ecuador, y así sucesivamente- nos prueban la magnitud del cambio. Se apuesta, con denuedo, a un desarrollo logrado gracias a la inserción en la economía internacional. También a que la competitividad debe lograrse con la aceptación de las reglas del mercado libre. Asimismo, a que el Estado tiene la tarea primordial de achicarse y de aceptar como un lema el del "santo temor al déficit", mientras aumenta su eficacia, para dejar un amplio espacio a la iniciativa privada. La reforma de la Seguridad Social, hacia sistemas cada vez más unidos a técnicas de capitalización del seguro privado, debe ligarse a una política de rentas que, mediante acuerdos de solidaridad nacional, haga disminuir las presiones salariales que contemplaron, e incluso azuzaron, los populistas de antaño. Y es preciso hacer todo esto de acuerdo con las reglas democráticas, poniendo en el centro de los afanes el culto a la Constitución, sin el que, sencillamente, no se explican estos pueblos.

En resumidas cuentas, y más concretamente en Chile, en Argentina, en México, se observa una activa búsqueda de una nueva política económica que enlace con la etapa del salitre en Chile,

con la expansión argentina que concluye con Yrigoyen, incluso con el porfiriato mexicano. En el medio queda más de medio siglo de equivocaciones. Es urgente recuperar el tiempo perdido. Por eso, con el talante de prisa exigente y de desprecio por lo que ha existido hasta ahora, que caracteriza a todo revolucionario, tres excelentes economistas nos han venido a contar a Madrid sus afanes y sus sueños. Afanes y sueños que expuestos en el viejo salón isabelino de la Casa y Torre de los Lujanes, bajo la mirada atenta de un Laureano Figuerola que escolta en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde su retrato a la reina Isabel II, fundadora de la corporación, traían a la mente una frase de Cabarrús, escrita en su *Discurso sobre la libertad de Comercio concedida por S.M. a la América Meridional*, presentado a la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País el 28 de febrero de 1778: "Haga lo que quiera el error para defender su imperio... podrá acaso sacrificar, en la sombra de la noche, a algún sabio a su furor, pero el fruto de nuestras meditaciones fermentará en el silencio, y sus efectos serán la época feliz que disipe las preocupaciones nocivas". Argentina, Chile y México, gracias a las meditaciones silenciosas de los economistas, comienzan a atisbar "la época feliz" que les fue arrebatada por el error hace sesenta, setenta, ochenta años.